La discapacidad como factor de vulneración del derecho a la salud y rehabilitación en mujeres privadas de libertad

Evelyn Vera Alfonso¹

RESUMEN

Introducción: Numerosas personas con discapacidad se encuentran privadas de su libertad, por ser sospechosas o culpables de hechos punibles y el Estado es el encargado de garantizar que todos los derechos fundamentales se cumplan aun estando en las instalaciones de una penitenciaría.

Objetivo: el presente estudio se propuso analizar las condiciones de salud de mujeres con discapacidad privadas de libertad desde la percepción de actores clave de un penal, en el marco del enfoque de derechos.

Material y Método: Estudio exploratorio, con enfoque cualitativo. Realizado en el marco del Trabajo Práctico de la Asignatura Investigación Social y Trabajo Social III del Instituto de Trabajo Social de la UNA, con el apoyo del Mecanismo de Prevención contra la Tortura. La técnica utilizada fue de entrevistas en profundidad. Como instrumento se utilizó una guía de preguntas que contenía las categorías de análisis a ser estudiadas. La muestra estuvo constituida por profesionales de las áreas de interés ubicadas dentro del penal, como ser Trabajo Social, Psicología y Judiciales. Se resguardó la identidad de las personas entrevistadas, así como las denuncias y/o situaciones que fueron comentadas durante las entrevistas por mujeres privadas de su libertad, o por funcionarios del penal.

Resultados y Conclusiones: Luego de las entrevistas y observaciones realizadas, se visualizó la precariedad en la que los profesionales realizan su labor. No cuentan con insumos, capacitación y apoyo necesario para llevar a cabo sus funciones. De acuerdo a lo manifestado por las entrevistadas, los organismos ni las autoridades correspondientes cumplen con su rol de velar por el bienestar de las personas con discapacidad privadas de su libertad. Se citaron como ejemplo, que estas áreas no cuentan con un registro de la cantidad de mujeres con discapacidad que se encuentran en el penal actualmente, así como la falta de insumos básicos para llevar a cabo sus funciones. Los mismos tienen que ser adquiridos y gestionados por los profesionales y por sus propios recursos en ocasiones.

---

1. Instituto de Trabajo Social, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.

Trabajo elaborado en el Marco de la Materia Investigación y Trabajo Social III.

Presentado en: Jornada de Jóvenes Investigadores de la UNA. San Lorenzo, Julio 2017. Jornada Internacional de Jóvenes Investigadores de la AUGM, Grupo Montevideo. Encarnación, Octubre 2017.

E-mail: evelynvera07@hotmail.com

DOI: 10.26885/rcei.foro.2017.36

Las áreas de Trabajo Social y Psicología de los institutos penales son las encargadas del manejo de la información y acompañamiento de los casos de mujeres con discapacidad privadas de libertad, de manera a darles un seguimiento y permitir que accedan a sus derechos básicos como ser salud o rehabilitación. Durante las entrevistas realizadas en la institución, se constató que ninguna de las profesionales de las áreas citadas ha intervenido directamente en casos específicos. Han tomado conocimiento, han escuchado, pero no han trabajado en la planificación de intervenciones para estos casos.

Ninguna de las profesionales al momento de la entrevista tenía conocimiento de lo que establece la ley en cuanto a personas con discapacidad. Han conseguido poco activando con otras instituciones como SENADIS según sus relatos y nunca han recibido capacitación para saber la ruta a seguir en estos caso. Por ende, esa ruta oficial de intervención, no existe.

Finalmente pudimos confirmar que el área de judiciales cuenta con un registro y con fichas de cada una de las internas, donde además de la situación judicial (procesada, condenada), cuentan con informaciones como; estado de salud, observaciones importantes, incidentes que haya tenido dentro del penal, pedido de algunas áreas para el caso, por ejemplo que salga, que acelere su juicio, etc., se visualizó la ausencia de las autoridades competentes; desesperación y cansancio de las profesionales a cargo. Como bien lo mencionada la entrevistada, “nosotras también estamos presas”.

Los datos facilitados por esta área nos dieron a conocer unos cinco casos de discapacidad dentro del penal: dos personas con discapacidad física, una persona con discapacidad física pero relacionada ya a la tercera edad (74 años), una persona con discapacidad intelectual, una persona con discapacidad psicosocial. Se pudo concluir que, al momento del levantamiento de los datos, la situación de salud de las mujeres con discapacidad es alarmante y además inhumana. El penal no contaba con un protocolo de atención o ruta de acción para mujeres con discapacidad que son privadas de su libertad. Lo que trae como consecuencia que las mismas vivan en una situación de constante vulneración de derechos y a lo que le sumamos el factor agravante de que no acceden a un servicio de atención o rehabilitación aun cuando lo necesitan por su condición. Por otro lado, aun existiendo un amplio abanico legal y de derechos, que asegura el cumplimiento de sus derechos y el acceso a sistemas de atención integral hasta la actualidad, en el penal donde se realizó el estudio, esto es letra muerta cuando son privadas de libertad. Existen esfuerzos de los profesionales del penal del área de judiciales y de trabajo social, aunque poco o nada han conseguido. La SENADIS, el ministerio o los mismos jueces, no han dado respuestas a sus peticiones de atención o de evaluación para poder tratar casos, que aunque sean poco (según los registros) representan una situación de violación total de derechos fundamentales y denota la total falta de organización y de inversión en el área, dejando a esta población invisible dentro del penal.

Refiriéndome a la intervención del profesional de trabajo social en la institución,

ésta se convierte en una intervención totalmente incompleta e insuficiente. Pues ni siquiera cuenta con insumos, capacidades y apoyo necesario de la institución para sobrellevar los casos. A esto le sumamos que los mismos no han recibido información y posibles rutas de acción para que su intervención pueda ser adecuada al contexto social y de emergencia en que se encuentran las mujeres, y como otro factor agravante la falta de interés hacia los casos de las mujeres con discapacidad, al no contar con registros mínimos de cantidad y tipos que se encuentran hoy, dentro de la institución.

Se constató la situación de vulneración, las falencias y las realidades de cada profesional dentro del penal.

Palabras clave: discapacidad, derechos humanos, privación de libertad.

REFERENCIAS

- Alonso, F. (2007). *Algo más que suprimir barreras: conceptos y argumentos para una accesibilidad universal*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Bareiro, L. (sf). *Discriminaciones y medidas antidiscriminatorias*. Asunción: AGZ Zamphiropolos.
- Broyna, P. (2006). *Un nuevo paradigma de la discapacidad y el rol de los profesionales de la rehabilitación*. Buenos Aires: El Cisne.
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. (2006). *Mujeres privadas de libertad*. sl: CEJIL, REGIONAL.
- Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. (2014). *Informe anual de gestión. Año 2014*. Asunción: MNPT.
- Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. (2015). *El derecho a tener derechos. Realidades del Encierro en el Paraguay*. Asunción: MNPT.
- Moscoso, M. (2011). *La discapacidad como diversidad funcional: los límites del paradigma etnocultural como modelo de justicia social*. sl: Dilema.
- NACIONES UNIDAS. (2011). *Defender los derechos humanos es un derecho*. Asunción: ONU.
- NACIONES UNIDAS. (2013). *Pobreza y derechos humanos*. Asunción: ONU.
- Ortros, M. E. (2011). Epidemiología y manejo integral de la discapacidad intelectual. *Salud Mental*.
- SENADIS. (2014). *Aproximación a la realidad de las personas con discapacidad*. Asunción: SENADIS.